

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

31ª REUNIÓN — 10ª SESIÓN EXTRAORDINARIA — 7 DE ABRIL DE 1988

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDISON OTERO**;
del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor **FERNANDO DE LA RÚA**;
del señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
doctor **ADOLFO GASS**,
y de la señora presidenta de la Comisión de Educación,
señora **MARGARITA MALHARRO DE TORRES**

Secretarios: doctores **ANTONIO J. MACRIS** y **LEONARDO JUSTO PALOMEQUE**

Prosecretarios: doctor **ALBERTO J. B. IRIBARNE** y señor **DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN**

SENADORES PRESENTES:

ACUIRRE LANARI, Ramón
AMOEDO, Julio A.
BENITEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
DEL VILLAR, Manuel
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JUAREZ, Carlos Arturo
LAFFERRIERE, Ricardo E.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTIARENA, José H.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.
NAPOLI, Antonio O.
OTERO, Edison

RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI, Ramón Eduardo
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TENEV, Carlos
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.

AUSENTES, EN COMISION:

BRASESCO, Luis A. J.
GROSSO, Edgardo Roger M.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LEÓN, Luis A.
MURGUÍA, Edgardo P. V.
SOLANA, Jorge D.

AUSENTES, CON AVISO:

GENOUD, José
NIEVES, Rogelio J.
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
SAPAG, Elías

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por La Pampa, doctor Antonio T. Berhongaray, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2976.)
2. Moción de la señora senadora Gurdulich de Correa para fijar el plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 2976.)
3. Continúa el tratamiento en particular del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios. Se aprueba con modificaciones. (S.-105-452/87.) (Pág. 2976.)
4. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, en mayoría y minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional. (C.D.-105-74/87.) (Pág. 2991.)
5. Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 10, tal como fuera aprobado en el punto 2. de este sumario. (Pág. 3022.)
6. Apéndice:
 - I. Sanción del Honorable Senado. (Pág. 3022.)
 - II. Inserciones. (Pág. 3023.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 41 del jueves 7 de abril de 1988:

Sr. Presidente (Otero). — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Otero). — Invito al señor senador por La Pampa, doctor Antonio T. Berhongaray, a izar la bandera en el mástil del recinto.

—Puestos de pie todos los presentes, el señor senador Antonio T. Berhongaray procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

PLAN DE LABOR

Sra. Gurdulich de Correa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente, voy a proponer un plan de labor, dado que la próxima semana tenemos las dos sesiones comprometidas con la presencia de los señores ministros de Educación y Justicia y de Obras y

Servicios Públicos, para que en esta sesión terminemos con el tratamiento del proyecto de ley sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios y comencemos el tratamiento del proyecto de ley sobre defensa nacional, interrumpiendo a las 24 para continuar mañana a las 10 hasta su aprobación.

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar la moción formulada por la señora senadora por Santa Fe de pasar a cuarto intermedio a las 24 y continuar mañana a las 10, con el plan de labor propuesto.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Otero). — Queda aprobada la moción. Se procederá en consecuencia.

3

PROHIBICION Y SANCION
DE ACTOS DISCRIMINATORIOS
(Continuación)

Sr. Presidente (Otero). — Continúa la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º del dictamen.

Sr. de la Rúa. — Se trata del artículo 1º del despacho en mayoría con las modificaciones propuestas por el señor senador Menem y que hemos aceptado.

Sr. Sánchez. — Solicito que antes de proceder a la votación se dé lectura por Secretaría al artículo 1º con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Otero). — Lo más conveniente es que se proceda a su lectura.

Sr. de la Rúa. — Así lo haré, señor presidente: "Artículo 1º — Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios —esta es la palabra que se agrega— determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos".

contemplada en el artículo 153; delitos contra la libertad de trabajo y asociación, mencionados en el artículo 158 del mismo código, etcétera.

Por estos motivos, había hablado del tema con el señor miembro informante y presidente de la comisión, doctor Fernando de la Rúa y habíamos llegado a la conclusión de que metodológicamente era más conveniente prever una norma de agravamiento general de las penas para todo tipo de delito que se pudiese cometer por odio a una determinada raza o nacionalidad.

Por lo expuesto, propongo que el artículo 2º contenga una norma legal que establezca lo siguiente: "Para todo hecho delictivo, reprimido por el Código Penal o leyes complementarias y que fuese determinado por odio a una raza, a un grupo étnico, a una religión o a una nacionalidad, o se cometiese con fines persecutorios o de hostigamiento por los mismos motivos, las escalas penales se agravarán en un tercio del mínimo a la mitad del máximo, que no superará el de la especie de la pena de que se trate". Es decir que aquí estamos estableciendo un agravamiento general para todo tipo de delitos que se hayan cometido por odio a una raza, un grupo étnico, una religión o una nacionalidad, o que se cometiesen con fines persecutorios o de hostigamiento basados precisamente en esos motivos. En ese caso, las escalas penales previstas se agravarán en un tercio del mínimo a la mitad del máximo, que desde luego no puede superar el máximo del tipo de la especie de pena de que se trate.

De esta forma podríamos suprimir los otros artículos en los cuales se especifican las penas en cada caso en particular.

Esta sería, concretamente, la modificación que proponemos.

Sr. Martiarena. — ¿Podría acercarnos una copia?

Sr. Menem. — En seguida...

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: precisamente iba a pedirle al señor senador Menem que leyera el texto nuevamente o que me alcanzara una copia si es que la tiene a mano.

Quiero manifestar mi conformidad con la propuesta, ya que como lo he anticipado en la segunda intervención que tuve en el debate en general, me parece que es la mejor fórmula para evitar que algunos hechos queden fuera y también para evitar introducir demasiadas reformas a la estructura del Código Penal y para

enunciar estas conductas o estas finalidades de las conductas como un agravante genérico para todo tipo de delitos.

Sólo solicitaría —con esto recojo la preocupación del señor senador Martiarena— que se incluyera también como motivación que ocasiona la agravante, el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, con lo cual entra la figura del genocidio, de acuerdo con la convención internacional respectiva.

De este modo, a continuación del concepto central de la propuesta del señor senador por La Rioja, habría que agregar, separado por la conjunción "o": "con el objeto de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso". En virtud de este criterio se suprimirían los siguientes artículos: 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º; y el artículo 9º lo consideraríamos después como artículo 3º de la ley.

De esa manera, se logra una ley más simple en su enunciado y más eficaz en sus propósitos.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez. — Es para hacer un pequeño requerimiento, señor presidente.

Como siempre es mejor el examen visual, me adhiero a la sugerencia del señor senador Martiarena de que nos hagan llegar una copia para que podamos examinar el texto literalmente.

Sr. Menem. — Está bien. Lo que pasa es que tengo el texto en borrador. Lo voy a repetir y, en todo caso, que se tome nota y se distribuya una copia.

Sr. Martiarena. — Podríamos pasar a un cuarto intermedio de dos minutos.

Sr. Juárez. — O de cinco minutos con permanencia en las bancas.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Otero). — En consecuencia, se pasa a un cuarto intermedio de cinco minutos permaneciendo los señores senadores en las bancas.

—Son las 18 y 58.

—A las 19 y 11:

Sr. Presidente (Otero). — Continúa la sesión. Está en el uso de la palabra el señor miembro informante. ¿Puede dar lectura al artículo 2º?

Sr. de la Rúa. — Sí, señor presidente.

Dice así: "Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por

persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate."

Esto tiene una primera parte, que son los delitos ya previstos en el Código Penal o leyes complementarias; es decir, no se habla de delitos de derecho civil sino de delitos criminales cuando el hecho está determinado por esta especial posición anímica del sujeto de obrar por persecución u odio racial, religioso o por la nacionalidad. Esta motivación del obrar de la gente opera como una calificante que lleva a la agravante.

La segunda parte recoge la fórmula de la convención contra el genocidio, cuando el hecho ha sido cometido con el objeto, con la finalidad de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. También opera aquí la agravante.

Lo que proponemos es una fórmula sencilla: elevar el mínimo y también el máximo; el mínimo, en un tercio, y el máximo, en un medio. Es decir, se le agrega la mitad del monto máximo de pena prevista y se forma así la nueva escala. Y se aclara en el último párrafo que en ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate, para no alterar el sistema de nuestro derecho penal.

En el Código Penal se establece que la prisión perpetua —la prisión o reclusión perpetua es la pena máxima— se tiene por cumplida a los veinticinco años, pudiéndose obtener a los veinte la libertad condicional.

Si aplicáramos la aritmética que resulta de la primera parte del texto proyectado, en algunos casos se podría llegar a penas superiores a los veinticinco años, y no queremos alterar el sistema del Código.

Por eso, simplemente aquí se deja en claro que el sistema de penas previsto en el Código Penal no es modificado por la norma.

Lo que sí se consagra es una agravante para los delitos cometidos con esa motivación o finalidad. Por eso se dice que en ningún caso se excederá del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: en las últimas veinticuatro horas, y aun cuando en el curso del debate se había hecho alguna referencia al pasar sobre el propósito de traer a la sesión de hoy un texto que sería el concretado

en la propuesta, se ha cambiado por el presidente de la Comisión y el señor senador por La Rioja —supongo que no es la Comisión en pleno— toda la estructura de este orden del día que estamos considerando.

El argumento fundamental es que vamos a establecer una simplificación del sistema que va a llevar a que en un solo artículo dejemos consagradas todas las posibilidades que pueden existir de comisión de hechos por motivaciones raciales, religiosas, políticas, etcétera. Se piensa pues, que con esto vamos a ganar, porque la simplicidad traería ventajas.

Estoy en total y absoluto desacuerdo con la tesis y con el fundamento. Creo que no podemos legislar, en una materia de tanta importancia como la que nosotros mismos le hemos asignado en nuestros discursos iniciales, con esta improvisación. Y digo "improvisación" sin ánimo de molestar ni agraviar a nadie. En efecto, la Cámara de Diputados trató un proyecto del Poder Ejecutivo que establecía precisamente qué artículos del Código Penal merecían incluir la calificación por la circunstancia agravante derivada de la discriminación, y ese proyecto fue sancionado en esa forma. Pasó entonces a la Cámara de Senadores, donde después de un tiempo la comisión abocada a su estudio prescindió de él, con el argumento de que tenía contradicciones y aspectos que no lo hacían recomendable. Se presentó un nuevo proyecto, que ahora aparece con dictamen de comisión. En él se enumeran las situaciones en que se consideró necesario y conveniente fijar de manera precisa cuándo un hecho criminal debe considerarse agravado por la circunstancia de la discriminación.

Es decir que llegamos a la sesión de hoy con una concepción proveniente del Poder Ejecutivo en sus comienzos, discutida en la Cámara de Diputados y concretada en la recomendación hecha por el Poder Ejecutivo al agregar este tema a la lista de asuntos a tratar en las sesiones extraordinarias. Me permito insistir en que el proyecto presentado por el diputado Cortese en la Cámara Baja, cuyo número de expediente yo citara, enumera concretamente las figuras penales que deben ser agravadas.

En esta sesión, pues, vamos a tener que improvisar un concepto para captar si esta fórmula genérica, total, simplista que nos proponen los señores senadores, es suficiente para que le demos un voto aprobatorio. Y yo me voy a oponer, no solamente porque estoy pensando que me va a costar un poco adquirir la convicción de la conveniencia de esto sin un estudio

más detenido, sino también porque no veo que sea exacto decir que con esta fórmula, que eleva en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal cuando la motivación sea discriminatoria, vamos a dar una solución adecuada. En efecto, vamos a ser más papistas que el Papa. Esto no figura en ninguna legislación del mundo que yo conozca. En cada legislación que se ha dictado, empezando por los convenios internacionales, se ha establecido cuáles son las motivaciones fundamentales que se tienen en cuenta en el caso de genocidio, y se ha recomendado a los países miembros de la comunidad internacional, en cuanto al derecho positivo interno, que tengan esto en cuenta con referencia particular a casos concretos. Entonces, me parece que estamos yéndonos tan lejos que en la redacción ya observo, inicialmente, que cuando dice "Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal", se está dejando vivo y sin modificaciones al inciso 4º del artículo 80 del Código Penal, cuando precisamente ha sido motivo de consideración particular al hecho de que cuando se trata de un homicidio agravado al que corresponde reclusión perpetua o prisión perpetua, en el inciso 4º, dice: "por placer, codicia, odio racial o religioso", y nosotros digamos: "por placer, codicia, persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales".

Ya, en ese caso, hablar de que la pena va a ser elevada de un tercio a un medio no tiene vigencia, porque la pena es prisión o reclusión perpetua. Desde luego que eso no es lo más importante, aunque es importante.

Con esta redacción dejamos subsistente el inciso 4º, hablando solamente de odio racial o religioso cuando, con toda precisión, con todos los antecedentes, los del Poder Ejecutivo, el proyecto del diputado Cortese, la sanción de la Cámara de Diputados, incluidos los nuestros, a través de la comisión, habíamos establecido que fuera por placer, codicia, persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales.

Es decir que en el caso concreto del artículo 80, inciso 4º, no estamos haciendo entrar esa situación en esta fórmula genérica que nos proponen los miembros de la comisión. Tendríamos que entrar ya en una primera discriminación, salvo el caso del artículo 80, inciso 4º, en que además de lo allí previsto, cuando el homicidio sea por afectación de la religión o ideas

políticas o gremiales, también merecerá ser encuadrado y castigado con pena de prisión y reclusión perpetua.

En esta improvisación que debo hacer ahora se me ocurre pensar también —estoy haciendo trabajar mis neuronas aceleradamente para adecuar este nuevo texto a las situaciones que puedo conocer simplemente a través de mi experiencia profesional— qué ocurre cuando se produce una estafa, hurto o robo. ¿Qué va a suceder? Que la víctima podrá decir: este robo se ha hecho en mi negocio establecido en el Once porque yo soy judío o coreano. Entonces, este robo, hurto o estafa contra mí cae en esta fórmula genérica. Y la pena de robo, hurto, defraudación o estafa deberá ser aumentada de un tercio a un medio, como se propone, porque se invocará que la situación del negocio en ese barrio, la naturaleza social, la calidad racial de la víctima y algunos testimonios, podrán hacer inducir al juzgador que se encuentra frente a un delito agravado por la discriminación racial.

Sr. Menem. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena. — Cómo no. Creo que vamos a seguir improvisando en la interrupción y en la exposición. Pero improvisemos...

Sr. Menem. — En primer término, no se trata de una improvisación. Lo anticipé ayer y lo he consultado con distinguidos penalistas, que me aconsejaron que el método correcto era éste, el de la norma genérica, y no entrar a discriminar en delitos en forma un tanto, si se quiere, arbitraria.

Lo que sí le quiero decir, además, es que no basta con que se invoque. Parece que bastaría con invocar que el delito se ha producido por odio a una raza para que el juez condene.

Sr. Martiarena. — He dicho "se invocará...".

Sr. Menem. — Y si se prueba que ha sido por odio a una raza, deberá ir agravada.

A quien roba en una mezquita o en una sinagoga, no por el hecho de enriquecerse sino por causar el daño, porque le tiene bronca y odio a esa religión, desde luego que le corresponde la figura agravada. Por eso la incluimos.

En la redacción original, en el proyecto de Diputados y en los demás antecedentes quedó fuera ese tipo de delito, como el que roba en mezquita o sinagoga por odio a la religión.

No basta con invocar sino que hay que probar. Gracias.

Sr. Martiarena. — Eso no destruye lo que he dicho porque yo no me he referido al robo en

una sinagoga sino a los delitos de hurto, robo, estafa en cualquier otra circunstancia que la víctima pueda invocar, y de alguna manera procurar probar, para perjudicar al victimario en un grado mayor que el que marca el Código Penal para los casos comunes.

Además, pienso que a pesar del consejo de los penalistas, que no dudo habrán dado, tal vez no se han tenido en cuenta otras circunstancias y se rompe el esquema del Código Penal, que no ha querido más que hacer una enumeración de circunstancias atenuantes y agravantes, como en otras épocas estaba legislado.

El artículo 40 del Código Penal dice: "En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente."

El artículo 41 establece: "A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 1º) La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados; 2º) La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas...", etcétera.

Es decir que venimos a introducir una circunstancia agravante definida, no dejada a la consideración del juzgador sino definida para cualquier delito, lo cual verdaderamente me parece que excede todo el marco de la legislación penal prevista para la represión y sanción de los delitos ocasionados por discriminación.

Pero he dicho antes, y quiero concretarlo, que esto excede el marco de las convenciones internacionales.

Advierto que tal vez este propósito de dar una nueva estructura al proyecto que consideramos ha venido determinado por el hecho de que en las proposiciones que yo he formulado incluyo delitos que no habían sido incorporados por la comisión.

Debo aclarar perfectamente que no he procedido con un criterio personal, subjetivo, arbitrario, sino que me he ajustado a situaciones que no habían sido consideradas evidentemente por el autor del proyecto ni por la Comisión y que surgen de la Convención sobre represión y san-

ción del genocidio, que tengo a la vista y que dice así: "En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo...". Estaba bien, entonces, la inclusión del artículo 80, inciso 4º, modificado por la Comisión, porque se trataba de la matanza de miembros del grupo por odio racial, religioso, de nacionalidad o por ideas políticas.

Continúa diciendo "... b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo...", que está en el Código Penal precisamente como agravante en los casos de lesiones vinculadas al artículo 80 en general.

Dice después "... c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial...". Es por eso que he proyectado un artículo que dice qué pasa cuando se da el sometimiento intencional del grupo, no solamente el abandono de la persona sino el sometimiento intencional del grupo o de las personas que forman parte del grupo. Lo he hecho para adecuar el proyecto al espíritu y a la letra de esta convención internacional, que es la base sobre la cual trabajamos.

Sigue diciendo: "... d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo...". En virtud de esto es que he elaborado un artículo que con referencia al aborto agrava la pena porque precisamente la convención internacional habla de la necesidad de sancionar, como acabo de leer, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

Dice por fin: "... e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

He proyectado un artículo para adecuar ése a esta precisión que contiene la Convención de París de 1948.

De manera que no quiero suponer que porque yo haya propuesto artículos adicionales los miembros de la comisión se hayan sentido inclinados a decir: "No, porque esto resulta excesivo, por un lado, y demasiado escaso, por el otro; hagamos una sola cosa, que sea un rasero, en que por cualquier circunstancia el homicidio sea calificado por el artículo 80, y también sea cual fuere el delito de que se trate", como en el caso del duelo, que he citado como ejemplo, cuando se reta a duelo a alguien que es negro, judío o mormón y que entonces, en ese caso, la pena podría ser agravada. No se trata de eso.

El concepto de esta convención internacional y aquel con que se ha estudiado y estructurado este proyecto de ley a través de todas las presentaciones que aquí se han efectuado, en el Parlamento Argentino, no es ése. No veo por qué deberíamos abandonar ese criterio, aunque sean pocos los casos. Son los más importantes, los especiales.

Salvo simples diferencias de palabras en la redacción del memorando, no estoy de acuerdo con lo que respecta al homicidio en riña. Me parece que el homicidio en riña no está contemplado en estos antecedentes y crea un problema de interpretación jurídica que vale la pena tener en cuenta. Si lo vamos a debatir, podremos expresar detalladamente nuestra opinión.

No creo conveniente un cambio de estructura. No considero que sea aconsejable, porque además rompe todo el esquema del Código Penal.

Se ha dicho que es necesario que el Código Penal sea modificado integralmente. Estoy de acuerdo con el señor senador de la Rúa cuando manifiesta que no le gustan los parches de los códigos, más aún cuando en nuestra comisión tenemos en estudio el proyecto de reforma que ha presentado el señor senador Jiménez Montilla, en el cual el señor senador de la Rúa ha encontrado —yo también lo tengo marcado— algunos casos en que la pena debería ser agravada con motivo de discriminación racial, religiosa, etcétera.

Me parece que estamos cayendo en una enorme contradicción y en un simplismo contrario a la estructura del Código Penal y a la necesidad de esta ley.

Si estuvimos tan de acuerdo, ¿inclusive consideramos que debíamos reconocer la preocupación del legislador que proyectó un nuevo Código Penal, no veo por qué ahora vamos a tirar improvisadamente por la borda todo ese sistema, todos los antecedentes y decir: "Élève en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias".

Además, téngase presente que al decir "o leyes complementarias" queda comprendida, por ejemplo, la disposición que contiene la ley de automotores, en un artículo, que establece una pena. El juez, a pedido de parte o de oficio, tendrá que constatar si en la ley relacionada con el dominio de los automotores hay alguna figura o alguna circunstancia que lo obliga a considerar que existe una persecución racial, religiosa o por ideas políticas o gremiales.

Lo mejor es enemigo de lo bueno, dice un viejo adagio. Estamos buscando lo mejor para que metamos dentro de esta gran bolsa de la

no discriminación todas las circunstancias que podrían estar previstas en el Código Penal, el que ya está llegando el tiempo de que sea objeto de una modificación integral.

Nosotros estamos introduciendo una modificación sustancial a una ley tan importante como es el Código Penal. Limitémonos a los casos que se han estudiado, a los que está comprobado que pueden ocurrir y normalmente ocurren, consuetudinariamente o no, pero contemplemos situaciones que den motivo a que se consideren incursos en la discriminación.

Además, no sé por qué razón en este texto que nos hacen llegar dice: "...por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad..." y no se incluye "o ideas políticas o gremiales", palabras que eran consideradas en el propio proyecto del señor senador de la Rúa, en el despacho de la comisión y en los antecedentes de la Cámara de Diputados. Es decir, han sido suprimidos. No sé por qué; no nos han dado ninguna explicación.

De manera que esta participación que hago en el debate puede resultar un poco desvaída, porque estoy haciendo un repaso de derecho penal a muchos años de mi egreso como abogado. Pero estoy aplicando criterio y sentido común —creo que así puede considerárselos—, ya que no he tenido tiempo para consultar a ningún tratadista o especialista y si ya aprobamos este texto, sería tardío hacerlo.

Entonces esperaremos la crítica o los elogios de la prensa especializada y de la opinión de los autores. Pero si tenemos en nuestras manos las opiniones jurídicas que han sido estudiadas por el Poder Ejecutivo, concretado el tema en un proyecto de ley redactado por los asesores del presidente de la República y considerados por largo tiempo en Diputados, con consultas a los especialistas y con discusiones en el recinto, con la concreción de un nuevo proyecto del señor senador de la Rúa y un dictamen de la comisión, ahora vamos a cambiar todo esto en aras de decir que la modificación es lo más simple? Y siendo lo más simple, ¿es lo más conveniente? A veces lo más simple es lo más conveniente, pero no siempre es así.

Creo que en este caso esta simplicidad con que se quiere modificar la estructura del proyecto pasa a ser una inconveniencia cuyas consecuencias futuras no estoy en condiciones de determinar, pero que supongo podrían producirse. Habría que estudiar cada situación y determinar con más elementos que estos que menciono, la conveniencia o inconveniencia de este tema.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: he aceptado la sugerencia del señor senador por La Rioja, porque me parece constructiva; hemos coincidido en que un agravante genérico satisfacía las necesidades y propósitos de esta ley.

No ha sido ajena tampoco la propuesta del señor senador Martiarena en el sentido de agregar otros delitos para el agravante, con lo cual, de siete que se proponían inicialmente en el proyecto, pasaríamos a doce, y aún quedaría la sensación de la existencia de otros delitos que no habría por qué excluir del agravante.

Este artículo no se incorpora al Código Penal. Se trata de una ley específica para este tema —el problema de la discriminación racial o religiosa—, que está contemplado en convenciones internacionales. Y desde luego, a nadie se le escapa que tiene que tratarse de hechos o delitos que puedan ser aptos para el fin de perseguir, o satisfacer el odio por la raza, la religión, la nacionalidad, y está en la propia esencia o naturaleza del hecho y en la apreciación del juez si cabe o no el agravante. Ni siquiera basta la invocación de una cuestión de odio, sino que sea un medio apto para perseguir o manifestar ese odio, que es precisamente lo que se quiere sancionar más severamente.

La otra solución nos lleva a entrar casi indiscriminadamente en el Código Penal, al reformar un sinnúmero de artículos, quedando otros a los que también habría que incluir. El señor senador por Jujuy no sólo incluye el aborto sino el secuestro de menores; también podría proponerse la inclusión del delito de injurias o calumnias.

Sr. Martiarena. — He explicado el motivo, señor senador.

Sr. de la Rúa. — Ya lo he escuchado, señor senador. Cada uno tiene un motivo para sugerir otro artículo. Por eso el criterio final es que resulta más conveniente una norma general dentro de esta ley, que es específica, y de esa manera evitamos entrar en el Código Penal. Esta ley luego se tendrá en cuenta, si se trata de actos de persecución u odio racial o religioso. Y confío en que el caso de genocidio, difícil de imaginar en nuestro país, no se dé nunca; pero nosotros lo incluimos, cumpliendo de este modo con la convención internacional.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito al cuerpo que vote el artículo 2º tal como lo hemos propuesto con el señor senador por La Rioja, eliminándose del texto del proyecto los artículos siguientes hasta el 8º, inclusive.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: la proposición que formula el señor senador de la Rúa no es admisible reglamentariamente. Existe un despacho de comisión. Si se va a votar el artículo 2º debemos hacerlo tal como figura en el dictamen, y en el caso de que fuera rechazado corresponderá que se vote la proposición que se haga para sustituirlo. Esta es la forma en que debe manejarse reglamentariamente el asunto.

Sr. de la Rúa. — No, señor senador.

La comisión ha aceptado las modificaciones propuestas.

Sr. Martiarena. — No tengo constancias de que haya sido la comisión la que las ha aceptado. Sé que fueron aceptadas por los señores senadores por la Capital y por La Rioja; no conozco la opinión de los restantes miembros de la Comisión.

Sr. de la Rúa. — Soy el miembro informante de la Comisión.

Sr. Martiarena. — Como este debate está reducido a tres personas que ostentamos el título de abogado y alguna experiencia profesional, por lo que nos manejamos con cierta fluidez respecto de este asunto, puedo suponer que por mayor voluntad que tengan los otros señores senadores para interpretar y entender cada uno de nuestros argumentos, tal vez no resulte suficiente para que tomen una decisión frente a las tesis expuestas.

Si los señores senadores insisten en esta sustitución del esquema del despacho de la comisión, solicitaré la postergación de este asunto para la próxima sesión con el fin de que todos cuenten con la oportunidad de realizar las consultas pertinentes. Así como se ha requerido la opinión de algún penalista —quizá lo que yo digo no es lo más conveniente y sí lo que se propone—, quiero tener la tranquilidad cuando formule mi voto de que el tema fue objeto, por lo menos de mi parte, de consulta. Supongo que los señores senadores que no son técnicos en el tema pueden tener esta misma inquietud.

Por otra parte, no pasará nada en el mundo si dilatamos una semana la aprobación de este asunto. Debe tenerse en cuenta que desde hace más de dos años este proyecto se encuentra dando vueltas en el Congreso y que la Convención Internacional de París se sancionó en 1948. De esta forma tendremos oportunidad de formarnos un criterio de esta materia que es realmente técnica tal como la estamos planteando y explicando en este recinto.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez. — Señor presidente: el sesgo que está tomando la consideración de esta nueva disposición genérica motiva en este instante mi más profunda reflexión.

Me hago eco de las reflexiones mesuradas del señor senador por Jujuy y también acojo en mi mente jurídica la síntesis abarcadora que algunos de los miembros de la Comisión proponen para sustituir el primitivo despacho que se encuentra a consideración de este cuerpo.

Nunca tuve el propósito de extenderme en mis exposiciones, especialmente cuando el debate —como en este caso— ha sido casi agotado, pero sí quiero pensar en voz alta e invitar a los integrantes de la comisión que redactaron este nuevo artículo sustitutivo de las otras normas que especificaban particularmente hechos delictuales, a que lo hagan conmigo.

Como lo señaló el señor senador por Jujuy el simplismo puede resultar a veces riesgosamente abarcador comprensivo. He meditado y si este artículo sintético y genérico se sancionara así, quedaría comprendido incluso el delito de lesiones y se crearía un laberinto algo riesgoso para la libertad personal, agravada por un aumento de penalidad, si ante una simple riña callejera entre personas de distinta nacionalidad se invocara el matiz de un odio racial que, en realidad, puede no existir.

Como dice el señor senador por La Rioja, doctor Menem, es cierto que estas situaciones son materia de prueba. Sin embargo, existe el riesgo de que se presenten testigos que aseveren presuntos rencores raciales, con lo cual se complicaría toda la cuestión.

Pensando en voz alta, temo que, por evitar discriminaciones de un tipo, se pueda llegar a caer en discriminaciones de otro tipo. Entonces, quien agrede a una persona por su religión o por una determinada nacionalidad puede verse sujeto a agravaciones punitivas por ser vehículo circunstancial, aparente o sujeto a prueba de un hecho en el que pudo haber obrado por impulsos de odio o persecución.

Si procedemos tal como se propone, incluimos dentro de la pena el ejemplo que acabo de mencionar y, sin embargo, excluimos inequíticamente, rompiendo la igualdad que queremos preservar, el agravamiento de la pena en caso de una agresión por razones de odio político o social, que puede llegar a ser grave y hasta mortal.

Entonces, si excluimos el agravamiento de las penas por agresiones de tipo político y gremial

Congreso de la Nación Argentina
Información Parlamentaria

—a pesar de que las convenciones internacionales resguardan ese tipo de igualdad genéricamente expresada y comprensiva de tales situaciones—, podemos caer en otro género de discriminación; es decir, llegaríamos así a otro tipo de discriminación al eliminar aberraciones volitivas vinculadas con las persecuciones políticas o sindicales.

Es decir, al sancionar una ley dirigida a eliminar las discriminaciones y a punir las motivaciones bajas e inhumanas, sin incluir las situaciones a que me estoy refiriendo, dejaríamos sujeto a la penalidad común y no agravada a ese tipo de actos basados en odio o persecución política o gremial.

Lamentablemente, estos hechos han ocurrido en el país y si no se acepta este criterio que estoy exponiendo vamos a dejar sin protección a esas persecuciones y odios cuyos excesos más execrables ha visto la ciudadanía argentina en plenitud. Estas experiencias lamentables, denigrantes y vejatorias han ocurrido en la República Argentina. ¿Vamos, entonces, a soslayar esas situaciones? ¿No vamos a contemplar esta clase de ofuscaciones irracionales que han comprometido la vida de personas? Conozco a un dirigente sindical que ha quedado inhabilitado sexualmente a raíz de las picanas eléctricas que le aplicaron por su condición de dirigente gremial. Esto y mucho más ha ocurrido en el país y todos lo sabemos; la República se ha informado.

Tal como ha expresado el señor senador Martiarena, esta clase de excesos por esas motivaciones han sido resguardadas en convenciones internacionales y hoy nosotros las eludimos, por algún género de simplismo facilista o para no incurrir en discriminaciones o en selección de hechos que puedan motivar un examen exhaustivo de este tema.

Creo que la delicadeza y trascendencia de este asunto realmente merece una pausa para la meditación, para que todos alcancemos el perfeccionamiento más acabado de este tópico, tanto por los que están en la comisión como por quienes no la integran.

Aconsejo a mis pares no precipitarnos en una sanción que después pueda motivar exageraciones punitivas no analizadas exhaustivamente. ¿Qué podemos perder si nos tomamos siete días o acaso diez para hacer un análisis más profundo de este tema? Quizá podamos perder una o dos semanas, pero vamos a ganar en tranquilidad espiritual y en conciencia al saber que he-

mos realizado el estudio de un dispositivo que un poco se ha improvisado en estas dos últimas sesiones, la de ayer y la de hoy.

Este asunto surgió ayer y no hemos todavía tenido tiempo de observar, mediante un análisis minucioso de los hechos delictivos penados por el Código, cuáles son las consecuencias que un simplismo así puede traer para diversos géneros de delitos que quizá no hemos terminado de estudiar detenidamente. Además, nos permitiría volver sobre el tópico que ya he mencionado, que incluso fue considerado por el señor senador de la Rúa en su primer proyecto, en el que se incluían las motivaciones políticas de la misma manera que estaban incluidas en el despacho de comisión. ¿Por qué no estudiar la posibilidad, por lo menos para cierto tipo de delitos graves que atacan severamente contra la integridad física de las personas, de que se tenga que considerar también la motivación política o gremial? De esta manera, el que agrede en este país y causa lesiones graves o gravísimas o mata a un ciudadano por odio político o gremial no va a tener aumento punitivo. Pero al que agrede, con lesión de cualquier tipo, aun las menores o más leves, a una persona de distinta nacionalidad o por encón racial, le va a caer con todo el peso la legislación agravada. ¿No ocurrirá que en el fondo estamos haciendo discriminaciones entre los que son de una raza o profesan una religión con aquellos otros que tienen un credo político o sindical? ¿Sin quererlo no estaremos cayendo en otro género de discriminaciones con respecto a delitos censurables y censurados que han acaecido en la República, porque es evidente que no los inventamos ni son parte de una fantasía, ni tenemos que recorrer la historia internacional para crear tipos que han surgido como producto de los hechos que el país ha contemplado?

En síntesis, esas son las razones por las que me inclino, como miembro de la Comisión de Derechos y Garantías, por la idea de que este Senado haga una pausa para hacer un estudio más exhaustivo de una nueva construcción que ha surgido en el término de estos dos últimos días.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: lamentablemente, la interrupción de la sesión de ayer y la falta de algunos señores senadores en el recinto impidieron que muchos conocieran algunos de los argumentos que dábamos anoche a última hora, cuando quedamos sin quórum, lo que tendría que obligarme a repetir dichos ar-

gumentos para justificar por qué, en materia penal, nos limitáramos a la sanción de aquellos actos de discriminación por odio racial, religioso o por nacionalidad.

No quiero volver a repetir lo que dije ayer acerca de por qué no estaba de acuerdo en que se incluyera la mención de las ideas políticas o gremiales.

Ayer me refería a la diferencia en la intensidad de la protección y hacia la distinción entre aquellos actos discriminatorios de la vida común y que no tienen ninguna sanción y aquellos otros actos discriminatorios que sí tienen una reparación en el orden civil. A eso tiende, precisamente, la primera norma de este proyecto.

También nos referíamos a algunos otros actos que requieren una sanción mucho mayor, penados con la pérdida de libertad del victimario, que son los delitos del derecho penal.

No quiero volver a hacer la argumentación de ayer porque creo que está debidamente asentada y consta en el Diario de Sesiones. Lo que sí quiero expresar es que, si bien es cierto que el señor senador por Jujuy ha extraído de las convenciones internacionales cuáles son aquellos hechos que se reprimen especialmente y que justifican su inclusión, también es verdad que hay muchos otros delitos que pueden cometerse por la misma razón de odio racial y religioso que no están en ninguna convención y que nosotros no tenemos por qué dejar de contemplar.

Se dan muchos otros casos de delitos que también mencioné en la primera parte de mi exposición de ayer. En ese sentido, yo preguntaba por qué íbamos a dejar afuera a la extorsión. En nuestro país se han producido en los últimos años muchos secuestros extorsivos. Incluso hubo una acusación o una queja en el sentido de que esos secuestros extorsivos se producían respecto de integrantes de una colectividad y que se consumaban por odio racial o religioso. Entonces, yo pregunto por qué vamos a dejar afuera este tipo de delitos.

Creo que lo que podemos hacer es retacear lo que figura en una convención internacional; del mismo modo, considero que no se nos puede impedir ampliar el espectro de protección frente a la motivación racial o religiosa que impele a cometer el delito.

Con esta norma vamos más allá de la convención internacional. Creo que desde 1948 o desde que se sancionó se han producido muchos hechos. Lamentablemente, la vida diaria es muy rica en nuevas modalidades de comisión de delitos. Se han inventado nuevos tipos de delitos, que ni siquiera estaban previstos anteriormente.

Por eso creo que está bien que le demos una amplia protección a las personas cuando son víctimas de delitos por cuestiones raciales o religiosas. Considero que estamos defendiendo la dignidad del hombre. No lo hacemos con un criterio simplista; una cosa es simplificar y otra es ser simplista, y esto no es ser simplista sino simplificar procurando que la protección alcance al mayor número de casos. Se aplicará en algún tipo de delitos; en otros, no.

Pero les pregunto ¿por qué vamos a dejar afuera el tema de las injurias o de las calumnias? ¿Por qué vamos a dejar afuera algún tipo especial de privación de la libertad, como el del artículo 142 bis? Es decir, hay muchos otros más, y con ese criterio tendríamos que llegar a modificar prácticamente un tercio o medio Código Penal. Siguiendo con ese criterio, deberíamos dejar de lado esta iniciativa y abocarnos ya a sancionar un nuevo Código Penal; por consiguiente, la ley que reprime la discriminación tendría que esperar que terminemos de estudiar y aprobar ese nuevo Código Penal.

Por último, y con respecto a la insistencia del señor senador por Santiago del Estero sobre las riñas que se producen por motivos políticos —tema que contesté ayer—, afirmo que desde esa posición tendríamos también que agravar las penas cuando se trata de riñas motivadas por cuestiones que se han dado en el país y originadas en el hecho, por ejemplo, de pertenecer a distintos equipos de fútbol. En este campo se han producido homicidios y lesiones. Y ante la pregunta del señor senador en el sentido de por qué odio racial sí y odio político no, yo plantearía por qué no cuando es por rivalidad deportiva o cuando se agreden patotas por ser de distinto barrio. En ese caso la ampliación que hacemos llega a tal extremo que la ley de discriminación racial y religiosa pierde su contenido, porque debemos tener en cuenta que estamos tratando la ley que condena la discriminación, pero un determinado tipo de discriminación y no todas ellas.

En materia penal se está refiriendo exclusivamente a la discriminación por odio racial, religioso o de nacionalidad. Ese es el motivo principal de la iniciativa. Si empezamos a ampliar los motivos que pudieren inducir a cometer delitos, estaremos desvirtuando la ley.

Por eso, en primer término, quiero decir que en este tema no hay improvisación. En este recinto muchas veces hemos cambiado artículos y no se nos ha endilgado por ello esta calidad de improvisación. Deseo comentar que es cierto que he consultado después de firmar el despacho a algunos legisladores que me

hicieron conocer observaciones que he compartido, en el sentido de que era mucho más aceptable desde un punto de vista metodológico y técnico esta norma genérica antes que incluir algunos pocos artículos, dejando fuera otros casos que merecen el agravamiento.

En segundo término, reitero que no se trata de un criterio simplista, aunque sí simplifica las cosas.

En tercer lugar, creo que el tema ha sido debidamente tratado en las comisiones. No soy partidario a ultranza de sancionar hoy el proyecto, pero me parece que ha sido suficientemente analizado. Siempre hemos seguido el temperamento de que el miembro informante es quien habla por la Comisión. Si hay aquí algún integrante de la misma que no esté de acuerdo, está en libertad de dar sus razones. Pero nunca a un miembro informante se le ha dicho que no representa a la Comisión y que debe consultar a los demás miembros.

Por estas consideraciones creo que debemos seguir avanzando en el tratamiento de esta norma tan demorada. No es cuestión de siete o de diez días más, sino de que el Congreso Argentino demuestre su convicción inequívoca de reprimir estos actos. Soy partidario de que le demos forma a esta ley que ha de reprimir uno de los actos más indignos que pueden cometerse contra la condición humana, como es la discriminación por odio racial, religioso o de nacionalidad.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez. — Señor presidente: espero que la reiteración en este tema de tanta trascendencia no incomode a nadie. Pero quiero ante todo aprovechar esta oportunidad para solicitar a la Presidencia del cuerpo que custodie y fiscalice el funcionamiento de las comisiones, el cual, en lo que a mí atañe, es un mito, o, como diría el señor senador por Catamarca, una utopía. Formo parte de comisiones, en algunas como vicepresidente, en otras como secretario, y reitero la solicitud que hago a todos para el trabajo responsable y serio de esta Cámara: que esas comisiones funcionen realmente. Que no sucedan cosas como las que me ocurren a mí, con la presentación de despachos ya firmados en mi oficina, sin que haya habido reunión, para que los suscriba.

Formo parte de seis comisiones y jamás he sido invitado a una sola sesión de ellas. No sé si funcionarán las otras, salvo la de Interior y Justicia, cuyo presidente, el señor senador Rubeco, me in-

vitó a una reunión con la presencia del señor secretario de Estado de Justicia. Lo demás transcurrir con despachos que circulan por las oficinas.

Esto no es serio. Creo que en Diputados funcionan las comisiones. No sé si funcionarán acá; sí digo que las que yo integro no funcionan, salvo por la invitación que, como dije, me formuló el presidente de la Comisión de Interior y Justicia.

Aclaro que no he tratado el tema en comisión, no obstante integrarla por no haber sido invitado, para incitar a un trabajo más responsable en el Senado de la Nación, paso ahora a la cuestión en debate.

En primer lugar, y en esto esperaba que me acompañara mi estimado colega el señor senador Menem, quiero evitar persecuciones por ideas políticas como la que sufrió su propio hermano, quien fue confinado en un lugar de Formosa y ganó un juicio por eso. Quiero evitar que haya persecuciones por motivos políticos en el país. Y no estamos creando imágenes fantasiosas. Esto ha ocurrido, y no sé si sigue ocurriendo, porque estamos contemplando un poco atónitos la desaparición de personas en la República, lo cual crea un estado de inseguridad. En los últimos días ha desaparecido una persona integrante de un partido político. Por lo que leí en los diarios se presentó un recurso de hábeas corpus que tuvo por contestación que esa persona no está detenida en ninguna comisaría.

¿Podemos hacernos los distraídos frente a esto? ¿Con distracciones de este tipo se va a construir la seguridad jurídica en el país? ¿Vamos a seguir ignorando, o haciendo que ignoramos, esta clase de hechos, motivados al parecer por reacciones, ofuscaciones, persecuciones u odios políticos? Ah, esto no, pero si se trata de un hombre de otra sangre, sí. Desde luego, tenemos que proteger a los perseguidos por razones raciales, pero también tenemos que proteger el respeto de las ideologías políticas, como con todo acierto lo contemplaba el dictamen de la comisión que está aquí, en las bancas, incluyendo las motivaciones políticas.

Y hay algún otro senador, del sur, que se tuvo que ir del país con motivo de persecución política para poder salvar su libertad, su integridad. ¿Vamos a ignorar esto también? ¿Vamos a contemplar esta situación? ¿Vamos a incurrir en la discriminación de la discriminación —valga la redundancia o el pleonismo—?

Esto es lo que estoy queriendo decir: sí, ha habido reacciones de tipo racial. Las conozco y todos las conocemos. Debemos sancionar para evitar que esto se propague en el país como un sistema de furia descontrolada, irracional e inhumana.

Pero también debemos poner coto y término a otro género de persecución ideológica. Y no hablo de los delitos menores, porque precisamente he particularizado sobre los delitos graves. Para esto hay que estudiar; para esto pido ese lapso, porque no puede ser que en el país se mate o se secuestre —estos son delitos graves— bajo la inspiración de la persecución política y nosotros no lo consideremos aquí, no obstante que ya está contemplado en el dictamen de la comisión.

No estoy hablando de los delitos menores; no me refiero a los delitos de calumnia o de injuria; esto no es susceptible de motivar una sanción de esta naturaleza. Yo hablo del resguardo de la integridad física, de la vida de las personas, ya que por allí hay que comenzar. Así lo hace el Código Penal.

Entonces, no caigamos en las exageraciones, porque estaríamos creando un fuero, un fuero fundado en la sangre. ¡No caigamos en las exageraciones, por favor!

Resguardemos lo que hay que resguardar. Y cuando hablo de ideas políticas o gremiales —no de ideas deportivas—, me refiero al respeto de los derechos que hacen a la esencia de la libertad humana, que es la libertad de conciencia política o de militancia sindical. No consideramos aquí la militancia en el ámbito deportivo, ya que sería ridículo introducirla, aunque fuera por asomo.

Estamos hablando de hechos que atacan el concepto de la dignidad humana y que constituyen atentados o crímenes de lesa humanidad. De esto hablo yo y quiero que los señores senadores no retaceen la sanción punitiva para quienes impunemente se solazaron en el atentado a las convicciones ideológicas o sindicales.

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: insistiré en la postergación de este tema.

Lo que se ha dicho desde mi última intervención me afirma en el concepto de que no podemos sustituir hoy toda la estructura del dictamen de la comisión por este artículo que se nos propone.

Se ha dicho que el presidente de la comisión, al proponerlo, usa de una facultad que le es propia y que, si alguno de los miembros no estuviera de acuerdo, podría hablar. Pero pienso que, de ninguna manera, podemos colocar este asunto en tal terreno.

El presidente de la comisión, además autor del proyecto, ha formulado el dictamen, ha hecho su informe. Con algunas modificaciones hemos votado el artículo 1º, que es el fundamen-

tal en este asunto, ya que define la posición del Parlamento argentino sobre la cuestión de la discriminación.

Y cuando propone esta modificación sustancial que cambia, repito, toda la estructura del proyecto que él ha informado no está usando verdaderamente de una facultad que le corresponde; usa de la facultad como senador de proponer una modificación.

No deseo, de ninguna manera, que se interprete esto como que quiero afectar al señor senador de la Rúa, con quien hemos tenido debates, encuentros y desencuentros a lo largo de los años, pero hallando siempre el tono reposado y tranquilo para la discusión de las ideas.

Pero yo estimo —y quiero que los señores senadores se hagan cargo de esto— que lo que se nos está proponiendo es verdaderamente importante. No es la simple modificación de un artículo. Es la modificación de toda la estructura del proyecto con un propósito distinto al aconsejado por la comisión.

El señor senador por Santiago del Estero hace hincapié, fundamentalmente, en que en el artículo que se nos somete ahora a consideración se omiten las ideas políticas y gremiales. Yo he preguntado por qué, dado que en toda la estructura del proyecto está contemplado y cuando aprobamos el artículo 1º lo hemos incorporado. Sin embargo, en esta modificación que se propone se lo suprime. No nos han dicho por qué.

Sr. Juárez. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena. — Sí, señor senador.

Sr. Juárez. — Quiero una vez más consignar que en cuanto a la consideración de la tipología sobre la base de la persecución u odio ideológico, político o sindical, pretendo circunscribirla, en mi concepto —y así creo que se debe proceder—, a los delitos graves del Código Penal, los que atentan contra la integridad física o la vida de las personas, exclusivamente.

Digo esto para que no se pretenda que yo estoy prohibiendo una generalización que, a mi juicio, no sería procedente.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Edilson Otero.

Sr. Martiarena. — He comprendido y estoy totalmente de acuerdo con el concepto.

Se dice que proceder de otra manera es retacear la protección en los casos de discriminación respecto de otros delitos. Pero yo pre-

gunto, sin ánimo de crear una contradicción en los pronunciamientos de los miembros de la comisión o de quienes proyectan el nuevo texto, ¿se ha creído que se retaceaba la protección de otros delitos cuando se produjo este despacho? No, yo estoy seguro de que no se ha pensado en que se caía en una forma de retacear la protección.

Lo que sucede es que además de estos casos muy expresamente determinados y establecidos en el dictamen de la comisión han surgido cuatro o cinco más. Lamento en cierto sentido haberlos propuesto, pero cuando estudié este asunto tuve la impresión de que además de estos casos expresos correspondía incluir los otros que figuraban en la convención internacional. Por eso elaboré los agregados que tengo propuestos y que obran en Secretaría. No me arrepiento de haberlo hecho porque me parece que es una interpretación correcta de la obligación que tiene el Estado argentino de sancionar en el derecho interno lo que ha firmado en el derecho público, y no pienso que sea suficiente motivo como para que modifiquemos toda la estructura.

Se dice también que con esto estamos cambiando medio Código Penal, y no es así. Inclusive se cae en la contradicción de mencionar la riña cuando precisamente en el despacho de la comisión, contra mi opinión —que si puedo voy a expresar oportunamente—, en el delito de riña, cuando ésta ocasiona la muerte de una persona, se dice "persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas". Quiero decir, entonces, que si hemos caído en el detalle de las normas que serían modificadas en el caso de la propia riña, hemos ido a un punto límite sobre lo que creíamos iba a ser modificado.

No entiendo esta contradicción en la que se está incurriendo. No creo tener toda la verdad o ser el dueño de ella, pero transmito mi observación, mi preocupación de decir que esto es tan extenso, tan importante, que deberíamos considerarlo más profundamente que lo que podemos estar haciéndolo esta tarde.

Y ¿qué perseguimos nosotros con esto? Queremos que haya una ley. Esta es tal vez otra cuestión que no ha sido considerada.

De algún modo nuestros partidos, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, han levantado en los últimos tiempos la idea de los textos "consensuados", aunque he dicho alguna vez que la palabra no me gusta; yo hablo de los proyectos concertados, por un prurito gramatical nada más. Si nosotros aceptamos esto y sabemos que en Diputados el Poder Ejecutivo

propuso otra cosa, que se aceptó con modificaciones, que el Poder Ejecutivo aumentó el número de asuntos para las sesiones extraordinarias para terminar incluyendo el proyecto Cortese, que tiene aproximadamente esta enumeración, y nosotros vamos a sancionar aquí como cámara iniciadora —en virtud de que se trata de un nuevo texto que surge de la iniciativa del señor senador de la Rúa y de la comisión— un proyecto que va a ir a la Cámara de Diputados, me pregunto ¿qué va a suceder con los diputados que han comprometido su opinión en una determinada estructura del proyecto de ley?

Quiero reiterar algo a que he hecho referencia ayer, que me han causado impresión las manifestaciones de los diputados, que sintieron verdadera satisfacción al saber que el Congreso argentino iba a sancionar una ley de esta naturaleza; que es la satisfacción que nosotros tenemos y queremos tener. Entonces, ¿vamos a hacer un cambio a esta estructura? Pienso que por lo menos deberíamos tener unos días para saber cuál va a ser la opinión que tendrán al respecto.

Estamos con un artículo 1º votado. No es el que yo pretendía; es el que quiso la mayoría. Debemos conformarnos con esto porque, en el fondo y en esencia, se ha querido preservar lo que todos deseábamos: la adhesión fundamental al principio de la no discriminación por estas motivaciones.

De manera que no se trata de que no estemos cumpliendo con la sociedad. Ya lo hemos hecho en la parte más importante y nos queda este detalle: si incluimos ocho o diez cláusulas en el Código Penal, tipificando especialmente la represión para los casos de discriminación. Creo que debemos conversar con los miembros de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y compulsar estas opiniones.

Según mi criterio podríamos tomarnos un tiempo para considerar esto que es una reforma sustancial de la estructura del proyecto.

No he querido ofender a nadie cuando he dicho "simplista". Quise decir "la vía simple", que de algún modo nos parece a nosotros que no es la más conveniente.

Por otra parte, no me han contestado qué sucede con el artículo 80, inciso 4º, sobre el cual he improvisado una objeción que voy a consultar con quienes saben mucho más que yo sobre esta materia, acerca de si este texto es suficiente para dar satisfacción a la inquietud referida a este artículo, que creo que es uno de los más importantes del proyecto porque transforma lo

que expresa el actual inciso 4º acerca de la persecución racial o religiosa en persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales.

Entonces aventemos todas estas dudas, sobre todo, porque podemos coincidir en una información para los señores senadores, que no son peritos en derecho y a los cuales los estamos aconsejando esta noche con ideas encontradas y desencuadradas y, de algún modo, nos pongamos de acuerdo o no, concertemos o no entre nosotros, reunámonos después de saber que esto que nos traen hoy va a ser aceptado, porque hay razón para aceptarlo, o será rechazado, porque hay razón para rechazarlo. Incluso, efectuar la consulta a los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados que, de alguna manera, luego tratarán este tema y van a querer —al igual que nosotros, ya que este es un precedente— levantar nuevamente sus manos para votar por una ley que termine definitivamente en la legislación argentina con el problema de las discriminaciones aún pendiente.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez. — Quiero advertir, a fuer de ser reiterativo —porque el tema lo merece—, que si votamos esta disposición limitándola —lo que no estaba en la intención de la comisión que formuló este despacho, que contemplaba la persecución o el odio político—, eliminando esta causal de agravamiento, vamos a seguir sancionando el "bill de indemnidad" para que el día de mañana se puedan seguir produciendo detenciones de políticos y se los pueda enviar a la cárcel, nada más que porque son políticos, se pueda detener a sindicalistas nada más que porque son sindicalistas y se pueda detener y encarcelar a los gremialistas, nada más que porque son gremialistas. Y acá, lamentablemente, hay algunos señores senadores que han sufrido ese tipo de persecución en este país durante distintos gobiernos y lo lamento.

Desde siempre me opuse a este género de persecuciones ideológicas y si hoy se me da y brinda la oportunidad de hablar o de gritar, he de hablar y gritar para que nadie olvide que cuando acá se produce algún hecho interruptivo del sistema, lo que primero se hace es abrir las cárceles para que los políticos se vayan a pudrir ahí.

Terminemos con esto. Esta ley lo facilita; da la oportunidad de que contemplemos, so capa de perseguir las discriminaciones, la discriminación contra los políticos o contra los gremialistas.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Para completar cuanto he dicho, voy a hacer una moción de orden en el sentido de que se aplase la consideración de este asunto por un tiempo determinado que fije el cuerpo.

Esto está previsto en el artículo 109, inciso 7º del Reglamento, que dentro de las mociones de orden establece en ese inciso "que se aplase la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado o indeterminado". Yo propondría que no sea anterior a la próxima semana.

Sr. Presidente (Otero). — La moción de orden no se discute.

Se pasa a votar la moción de orden propuesta por el señor senador por Jujuy.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Otero). — La votación ha resultado negativa por 10 votos a favor y 18 en contra. Se va a votar en primer término el artículo 2º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Insisto en que el texto que he leído es el aceptado por la comisión. Hablo en nombre de la comisión, y he consultado a todos sus miembros presentes, con excepción del señor senador por Jujuy, senador Benítez, con quien no he podido hablar. Pero con los demás lo he hecho y aceptan las modificaciones que he enunciado. Por lo tanto, he hablado en nombre de la comisión, en conocimiento de la opinión de sus miembros.

Rechazo enfáticamente las desafortunadas expresiones del señor senador por Jujuy en su intervención anterior. Pido que se vote el texto de la comisión tal como ella lo acepta.

Sr. Martiarena. — Corresponde que se vote el despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Otero). — La comisión acaba de aceptar. No podemos poner en duda la palabra del presidente de la comisión quien acaba de aceptar el texto que obra en poder de cada uno de los señores senadores y que reemplaza los artículos 2º al 8º.

Sr. Sánchez. — En ese caso, debemos interpretar que la comisión ha cambiado el texto de su despacho.

Sr. Presidente (Otero). — Sí, señor senador.

Sr. Sánchez. — Por esa razón es lo que se le somete a votación en este momento.

Congreso de la Nación Argentina
Información Parlamentaria

Sr. de la Rúa. — Perfectamente.

Sr. Sánchez. — Quería dejarlo aclarado.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Benítez. — Señor presidente: en primer término quiero dejar constancia, para desvanecer algunas dudas que se han planteado, de que la Comisión de Asuntos Constitucionales siempre celebra sus reuniones; lo hace inexcusablemente en el despacho pertinente.

En segundo lugar, como se ha cambiado totalmente la estructura del proyecto, particularmente no tengo inconveniente en que se aplase la consideración de este tema, para que pueda realizarse un examen exhaustivo...

Sr. Presidente (Otero). — Esa moción de aplazamiento, señor senador, ha sido rechazada.

Sr. Benítez. — Pero quiero dejar constancia de mi conformidad con dicho aplazamiento.

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar el artículo 2º, cuyo texto tiene cada uno de los señores senadores en su poder, y que reemplaza los artículos 2º a 8º del dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 9º, que pasa a ser 3º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: con el mismo criterio de no introducir reformas al Código Penal, esta norma queda como artículo 3º con el texto que consigna el despacho, respecto del cual sólo debo introducir las siguientes correcciones gramaticales. El texto es el siguiente: "Artículo 3º: Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma."

"En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas o causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

Sólo quiero aclarar respecto de este artículo, señor presidente, que sanciona formas de propaganda que incitan al odio racial o religioso. Esto de manera alguna significa instaurar en el país la censura previa o limitar la libertad de pensamiento o de expresión. Se castiga la con-

ducta por la que se aliente la discriminación racial o religiosa en cualquiera de sus formas o se incite a la persecución o al odio por motivos raciales o religiosos, tal como lo consigna el texto.

Creo que es importante tenerlo en cuenta.

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con las modificaciones que acaba de señalar el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Otero). — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

4

LEY DE DEFENSA NACIONAL

Sr. Presidente (Otero). — Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional, y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con los términos del artículo 102 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de marzo de 1988.

Antonio T. Berhongaray. — Héctor J. Velázquez. — Juan Trilla. — Luis A. León. — Liliana I. Gurdulich de Correa. — Arturo J. Jiménez Montilla.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(29 de diciembre de 1987)

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Principios básicos

Artículo 1º — La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional.

¹ Ver el Apéndice.

Art. 2º — La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Art. 3º — La defensa nacional se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la Nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda.

Art. 4º — Para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. La seguridad interior será regida por una ley especial.

Art. 5º — La defensa nacional abarca los espacios continentales, islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el sector antártico argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscritos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley en cuanto a las atribuciones de que dispone el presidente de la Nación para establecer teatros de operaciones para caso de guerra o conflicto armado.

Contempla también a los ciudadanos y bienes nacionales en terceros países, en aguas internacionales y espacio aéreo internacional.

Art. 6º — La defensa nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos, en la forma y términos que establecen las leyes.

TITULO II

Finalidad del sistema

Art. 7º — El funcionamiento ordenado del sistema de defensa nacional estará orientado a determinar la política de defensa nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país, así como a su permanente actualización.

Art. 8º — El sistema de defensa nacional tendrá por finalidad:

- Determinar las hipótesis de conflicto y las que deberán ser retenidas como hipótesis de guerra;
- Elaborar las hipótesis de guerra, estableciendo para cada una de ellas los medios a emplear;